

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JURISDICCIONAL DEL PODER PÚBLICO



“Al servicio de la justicia y de la paz social”

TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN
SALA UNITARIA DE DECISIÓN CIVIL

Medellín, treinta (30) de junio de dos mil veintitrés (2023)

PROCESO	EXPROPIACIÓN
DEMANDANTE	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS
DEMANDADO	SAMUEL FERNANDO LÓPEZ RODAS
INSTANCIA	SEGUNDA –APELACIÓN AUTO-
PROCEDENCIA	JUZGADO NOVENO CIVIL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN
RADICADO	05001 31 03 009 2020 00204 01
	INTERNO 2023-106
PROVIDENCIA	AUTO INTERLOCUTORIO N° 108
TEMAS	DESISTIMIENTO TÁCITO-CUMPLIMIENTO CARGA DE LAS PARTES
DECISIÓN	CONFIRMA
MAGISTRADA PONENTE	MARTHA CECILIA OSPINA PATIÑO

Procede el Tribunal a decidir el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la parte demandante, frente al auto de fecha 29 de agosto de 2022, proferido por el Juzgado Noveno Civil del Circuito de Medellín, providencia mediante la cual se terminó por desistimiento tácito el proceso de expropiación instaurado por el Instituto Nacional de Vías – INVIAS, en contra del señor Samuel Fernando López Rodas.

I. ANTECEDENTES

El Instituto Nacional de Vías – INVIAS a través de apoderado judicial instauró demanda de expropiación, contra el señor Samuel Fernando López Rodas, pretendiendo se declare la expropiación de una (1) franja de terreno de 22,250M2 junto con sus mejoras, especies y construcciones, determinadas entre la abscisa inicial 14+680 y abscisa final 14+730 de conformidad con la ficha predial No 111601044-75, elaborada por PLANNEX S.A, identificado con el folio de matrícula inmobiliaria No. 01N-5046489, de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Medellín, Zona Norte y, cédula catastral No 05001000750030000149, predio rural ubicado en la Vereda Volcana, Guayabal

del Municipio de Medellín, requerida para el desarrollo del “PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL PROYECTO CONEXIÓN VIAL GUILLERMO GAVIRIA CORREA”, de la siguiente manera:

“PRIMERA: *Decrétese la expropiación por vía judicial a favor del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS, por motivos de utilidad pública e interés social con destino a la ejecución del “PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL PROYECTO CONEXIÓN VIAL GUILLERMO GAVIRIA CORREA” En virtud del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 0583 DE 1996, SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS, EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ, EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN Y EL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA – IDEA. De: VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA METROS CUADRADOS (22,250 M2) junto con sus mejoras, especies y construcciones, determinadas entre la abscisa Inicial 14+680 y abscisa final 14+730 de conformidad con la ficha predial No 111601044-75, elaborada por PLANNEX S.A y cédula catastral No 05001000750030000149, cuyo derecho real de dominio es ostentado por el señor SAMUEL FERNANDO LÓPEZ RODAS, identificado con la cédula de ciudadanía No 8.213.498, de acuerdo a lo estipulado en la Escritura Pública No 2297 del 21 de diciembre de 2003 de la Notaria 28 de Medellín, y Escritura Pública No 938 del 21 de mayo del 2004 de la Notaria 28 de Medellín, de compraventa de derechos de cuota, en la cual se describen los linderos generales, los cuales son: Por el NOR ORIENTE con predio de FERNANDO SALASAR BUITRAGO en 214,05 metros; por el ORIENTE en 148,16 metros con LUIS CARLOS MUÑOS MUÑOS Y MARIA ISABEL LÓPEZ MEJÍA; por el SUR ORIENTE en 148,16 metros con MARIA ISABEL LÓPEZ MEJÍA; por el SUR OCCIDENTE en 149,83 metros con SAMUEL FERNANDO LÓPEZ RODAS; por el OCCIDENTE en 205,53 metros con MARIA ISABEL MEJÍA DE LÓPEZ, inscritas en las anotaciones No 06 y 07, del folio de matrícula inmobiliaria No 01N-5046489 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Medellín - Zona Norte...”.*

SEGUNDA: *Se ordene el registro de la presente demanda en el Folio de Matrícula inmobiliaria números 01N-5046489 de la oficina de Registro e Instrumentos Públicos de Medellín, Zona – Norte, a favor del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS.*

TERCERA: *Para efectos de hacer efectiva la transferencia forzosa de propiedad y una vez proferida la sentencia, se ordene su registro junto con el acta de entrega del inmueble, en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Medellín, Zona – Norte.*

CUARTA: *Que la sentencia por medio de la cual se decrete la expropiación contenga igualmente la cancelación de cualquier gravamen, medida cautelar, limitación al dominio o inscripción que recaiga sobre el área requerida del bien anteriormente descrito.”*

La entidad demandante acreditó la consignación (Cfr. Archivo digital 16. Primera Instancia) reglada en el numeral 4 del artículo 399 del Código General del Proceso, ordenada mediante providencia de 04 de marzo de 2021, misma en la que se fijó fecha para realizar inspección judicial el día 19 de marzo de 2021 a las 10 de la mañana (Archivo digital 11. Primera Instancia), la cual se llevó a cabo y, bajo acta quedó constancia de la entrega anticipada del inmueble a expropiar identificado con MI No. 01N-5046489 a la apoderada de la parte demandante (Archivo digital 17. Primera Instancia).

El abogado de la parte demandada allegó memorial indicando que, en el Juzgado Veinte Civil del Circuito de Medellín bajo el radicado No. 05001 31 03 020 2020 00212 00 reposa un proceso de expropiación bajo la misma identidad del asunto de la referencia, por ello, solicitó se inadmita la demanda y se tome las decisiones a que haya lugar (Archivo digital 18. Primera Instancia), por su parte, la entidad demandante radicó sustitución de poder (Archivos digitales 19 y 19.01. Primera Instancia).

El Juzgado Noveno Civil del Circuito de Medellín mediante auto de fecha 18 de mayo de 2021 (Archivo digital 21. Primera Instancia), previó a resolver la solicitud de sustitución de poder presentado por la abogada de la parte demandante, la requiere para que presente dicha solicitud a través del correo electrónico registrado en el SIRNA, conforme lo señala el Decreto 806 de 2020; en ese mismo sentido, requirió al abogado de la parte demandada, quien presentó poder para actuar a través del correo electrónico "litigioverde@gmail.com", siendo el registrado en el SIRNA "luigabrielescobar@hotmail.com"; en cuanto a la nota devolutiva allegada por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos (Archivo digital 13. Primera Instancia), además, ordenó oficiar nuevamente indicando de forma correcta la MI No. 01N-5046489 del bien objeto de litigio; por último, en atención a la medida cautelar decretada por el Juzgado Civil del Circuito de Caldas, toma nota del embargo de los dineros que se depositen en este proceso a favor de la entidad demandante Instituto Nacional de Vías – INVIAS.

En providencia de 26 de junio de 2021 (Archivo digital 23. Primera Instancia), el Juzgado Noveno Civil del Circuito de Medellín incorpora la nota devolutiva de

la Oficia de Registro de Instrumentos Públicos (Cfr. Archivo digital 22. Primera Instancia), la cual, se puso en conocimiento de la parte demandante, advirtiéndole que, se encuentra pendiente la notificación de la parte demandada, toda vez que, *“si bien fue allegado poder, el mismo no fue otorgado para ser representado en el presente asunto; adicional, el escrito de solicitud de inadmisión no proviene de correo electrónico registrado en el SIRNA”*; finalmente, requiere a la parte demandante para que gestione la notificación del demandado dentro de los 30 días siguientes a la notificación de este proveído, so pena entender desistida tácitamente de la demanda como lo dispone el artículo 317 del Código General del Proceso.

En atención al requerimiento la parte demandante allegó escrito (Archivos digitales 24, 24.01 y 24.02) indicando que, el 26 de enero de 2021 la abogada Mabel Cecilia Monroy García, actuando como apoderada judicial de la parte demandante dentro del proceso de la referencia, presentó memorial subsanando la demanda, acompañado de la constancia de envío de notificación por aviso que contenía copia de la demanda, anexos y auto que inadmite, con constancia de recibido de 21 de enero de 2021, ello, porque desconocía el correo electrónico de la parte demandada, resaltando que, el abogado de la parte demandada ha manifestado conocer la demanda y sus anexos, además, ha realizado actuaciones dentro del proceso, en consecuencia, solicita se considere notificados por conducta concluyente y se de continuidad al trámite del proceso.

Mediante auto de 03 de febrero de 2022 el Juzgado Noveno Civil del Circuito de Medellín (Archivo digital 25. Primera Instancia), incorpora constancia de envío de notificación por aviso enviada al demandado, pesé a ello, indica que la misma no se tendrá en cuenta, hasta tanto la parte demandante no acredite haber diligenciado la citación para notificación personal, concediéndole el término de treinta (30) días, so pena de dar aplicación a lo dispuesto en el artículo 317 del Código General del Proceso.

El apoderado judicial de la parte demandante se pronunció en atención al requerimiento de 03 de febrero de 2022 (Archivos digitales 26, 26.1 y 26.2. Primera

Instancia) manifestando que, la demanda fue admitida el 04 de febrero de 2021, cuando se encontraba vigente el Decreto 806 de 2020 y, dadas las circunstancias de impedimento para entregar la citación personal a efectos de la notificación, la misma debía realizarse de acuerdo al artículo 8 del Decreto 806 de 2020, no obstante, ante el desconocimiento del correo electrónico de la parte demandada, el 21 de enero de 2021 enviaron la notificación por aviso, junto con una copia de la demanda y los respectivos anexos, de la cual, se aportó constancia al juzgado el 26 de enero de 2021, adicionalmente, alega notificación por conducta concluyente a que hace referencia el artículo 301 del Código General del Proceso, pues, la parte demandada no solo constituyó apoderado judicial al abogado Luis Gabriel Trujillo Escobar, sino que el apoderado ha dado a conocer en diferentes actuaciones que conoce de la demanda y sus anexos y ha venido actuando activamente en defensa de los intereses de sus mandantes. Por lo anterior, solicita se tenga en cuenta la notificación por aviso recibida por la parte pasiva el 21 de enero de 2021, remitiendo constancia al juzgado mediante memorial el 26 de enero de 2021, en cumplimiento del artículo 8 de la Ley 806 de 2020, en armonía con el artículo 292 del Código General del Proceso; en caso de no considerar esta notificación, solicita se decida mediante auto la configuración de la notificación por conducta concluyente establecida en el *“artículo 310 del CGP” (sic)*, en consecuencia, dar continuidad al proceso de expropiación judicial.

En providencia de 22 de junio de 2022 el Juzgado Noveno Civil del Circuito de Medellín (Archivo digital 27. Primera Instancia) advirtió que, si bien en los archivos digitales 07.02, 07.03, 18.01 y 18.02 obra poder general otorgado por el demandado al abogado Jaime Alberto López Mejía y, poder especial otorgado por este último al abogado Luis Gabriel Escobar, no obstante, el poder especial no cumple con las disposiciones del artículo 74 inciso 1º del Código General del Proceso, toda vez que, no se especifica que sea otorgado para representarlo en el presente litigio, ni indica el correo electrónico del apoderado, el cual debe coincidir con el registrado en el SIRNA, tal como lo dispone el art. 5º del Decreto 806 de 2020, agrega que, tanto el poder general, como el especial, no fueron presentados a través del correo registrado o aquel canal digital que esté autorizado, por tal razón, no es posible tener al

demandado notificado por conducta concluyente, de allí, que se haya requerido a la parte demandante para que proceda con la carga de integrar el contradictorio con el señor Samuel Fernando López Rodas, en consecuencia, requiere por tercera vez a la parte demandante, para que adelante todas las gestiones pertinentes para notificar al demandado, so pena de dar aplicación al artículo 317 del Código General del Proceso y terminar el proceso por desistimiento tácito.

Finalmente, el Juzgado Noveno Civil del Circuito de Medellín mediante auto de 29 de agosto de 2022 (Archivo digital 28. Primera Instancia), resolvió terminar el proceso por desistimiento tácito, al no cumplirse con la carga impuesta de notificar en debida forma al demandado.

II. LA IMPUGNACIÓN.

En desacuerdo con tal resolución, formuló el apoderado judicial de la entidad demandante los recursos de reposición y en subsidio apelación, argumentando que la presente demanda fue admitida el 04 de febrero de 2021 cuando se encontraba vigente el Decreto 806 de 2020, por ello, la entrega de la citación personal para efectos de notificación debía realizarse de acuerdo al artículo 8 del mentado Decreto, pero ante el desconocimiento del correo electrónico de la parte demandada, el 21 de enero de 2021 procedieron a enviar la notificación por aviso, junto con una copia de la demanda y los respectivos anexos, de la cual, se aportó constancia al juzgado el 26 de enero de 2021; adicionalmente, alega la existencia de notificación por conducta concluyente del demandado.

Por lo anterior, indica que, en ningún momento han omitido sus deberes dentro del proceso, por el contrario, acudieron a la notificación por aviso ante la renuncia de asistir de los interesados con el fin de que el presente proceso pueda continuar su debido trámite.

Dice que el demandado Samuel Fernando López Rodas, otorgó poder general a través de escritura pública, el que goza de autenticidad, a su hijo con relación al bien objeto del litigio; que el apoderado de los negocios del señor Samuel

Fernando López Rodas es el abogado Jaime Alberto López Mejía y, quien acude como apoderado especial es Luis Gabriel Escobar Trujillo, con lo que se entendería notificada la parte demandada; que el hecho de no haber remitido el poder por el canal que exige el juzgado, no exime la notificación por conducta concluyente del demandado, pues no se puede ignorar que con el otorgamiento del poder se dio por notificado el demandado; que bajo el entendido que el demandado no haya sido notificado por conducta concluyente y con la finalidad de ahondar en garantías, realizaron la notificación por aviso, siendo innecesaria; y además, en auto de 4 de febrero de 2021 el juzgado determinó: *“NOTIFICAR, EMPLAZAR, RECONOCE PERSONERÍA, Y DICTA OTRAS DISPOSICIONES”*, de lo cual se entendería que dispuso emplazar a todas las personas que tengan algún interés sobre dicho el predio a expropiar (Archivo digital 29. Primera Instancia).

Mediante auto del 21 de marzo de 2023 procedió el juzgado a decidir el recurso de reposición manteniendo incólume la decisión (Archivo digital 32. Primera Instancia), providencia en la que además incorporó el oficio 039 allegado por el Juzgado Civil del Circuito de Caldas informando la terminación del proceso y, finalmente concedió el recurso de apelación interpuesto subsidiariamente, en el efecto suspensivo.

III. CONSIDERACIONES

1. EL DESISTIMIENTO TÁCITO.

Conocido es que el procedimiento civil está orientado por un criterio tendencialmente dispositivo, de donde se infiere que corresponde a las partes, por regla general, el inicio e impulso de la serie. Así mismo, corresponde al Juez brindar el impulso pertinente cuando le corresponda.

De manera que las partes tendrán la carga de cumplir con sus obligaciones procesales dentro de los términos que corresponda, así como el Juez cuando a él concierna, para que el objeto del proceso se verifique; si ello no ocurre, surgen consecuencias que afectarán a la parte incumplida, o al juez cuando la demora se atribuya a él.

Para conjurar la inercia, desidia e inactividad de las partes en satisfacer una carga procesal o desplegar un acto de procedimiento, necesarios para proseguir la actuación que ha iniciado y es de su exclusiva incumbencia, se ha previsto como remedio figuras como la actualmente denominada *desistimiento tácito*, que además ha sido prevista como mecanismo de descongestión judicial.

Dicha figura fue inicialmente establecida por Ley 1194 de 2008, modificatoria del artículo 346 Código de Procedimiento Civil, encontrándose vigente en la actualidad la contenida en el artículo 317 del Código General del Proceso, que dispone en lo pertinente:

Desistimiento tácito. El desistimiento tácito se aplicará en los siguientes eventos:

1. Cuando para continuar el trámite de la demanda, del llamamiento en garantía, de un incidente o de cualquiera otra actuación promovida a instancia de parte, se requiera el cumplimiento de una carga procesal o de un acto de la parte que haya formulado aquella o promovido estos, el juez le ordenará cumplirlo dentro de los treinta (30) días siguientes mediante providencia que se notificará por estado.

Vencido dicho término sin que quien haya promovido el trámite respectivo cumpla la carga o realice el acto de parte ordenado, el juez tendrá por desistida tácitamente la respectiva actuación y así lo declarará en providencia en la que además impondrá condena en costas.

El juez no podrá ordenar el requerimiento previsto en este numeral, para que la parte demandante inicie las diligencias de notificación del auto admisorio de la demanda o del mandamiento de pago, cuando estén pendientes actuaciones encaminadas a consumir las medidas cautelares previas. (...) (Subrayas y negrillas fuera del texto original)

De conformidad con el numeral 1° de la norma, la carga que debe efectuarse para continuar con el trámite del proceso, debe ser ordenada por el juez para que su cumplimiento se lleve a cabo dentro de los treinta (30) días siguientes, vencido dicho término, si no se tiene la actuación de la parte que debía cumplirla, el juez tendrá por desistida tácitamente la respectiva actuación, debiendo declararlo en providencia en la que además impondrá condena en costas.

El desistimiento tácito entonces, es una forma anormal de terminación del proceso, la instancia o la actuación y ocupa ahora el lugar que antes ocupó la perención, figura con la cual tiene similitudes, pues tiene lugar a consecuencia de la inactividad de una parte y opera sin necesidad de que la parte la solicite.

Pertinente resulta mencionar que el desistimiento tácito ha sido entendido de diversas maneras; una de ellas es que se comprenda como la interpretación de la voluntad del peticionario de desistir de su pretensión o solicitud procesal, caso en el cual su finalidad es garantizar la libertad de las personas de acceder o no a la administración de justicia y la otra, es entender la figura como una sanción, en la medida en que opera por el incumplimiento de una carga procesal y se instituye como una manifestación de la potestad sancionadora del juez que se impone sin necesidad de recurrir a la ficción de que el peticionario ha desistido tácitamente de su solicitud. Entendido como una sanción, el desistimiento tácito busca garantizar el derecho de todas las personas a acceder a una administración de justicia diligente, célere, eficaz y eficiente, así como el derecho a obtener pronta y cumplida justicia, siendo por tanto una medida legal que pretende disuadir a las partes procesales para evitar las prácticas dilatorias en el trámite jurisdiccional.

2. EL CASO CONCRETO

De cara a la resolución del recurso de apelación que ahora ocupa la atención del Tribunal, importante resulta tener en cuenta, como se indicó en las consideraciones y porque conocido es, que el proceso civil es de parte, y corresponde a ellas no sólo el inicio e impulso del mismo, sino además el cumplimiento de las cargas procesales impuestas por la ley, o por el funcionario judicial, dentro de los términos que corresponda, si ello no ocurre, surgen consecuencias que afectarán a la parte incumplida.

Y es que una de esas obligaciones que le corresponde cumplir a la parte demandante en el proceso que nos ocupa, el cual se admitió en auto del 04 de febrero de 2021 (Archivo digital 09. Primera Instancia) aclarado mediante providencia de fecha 04 de marzo de 2021 (Archivo digital 11. Primera Instancia), es la de notificar a la parte demandada, pues naturalmente si no ocurre que se acredita dentro

de un término prudencial el cumplimiento de la carga impuesta, la misma normatividad procedimental tiene prevista la figura del *desistimiento tácito*, herramienta otorgada al juez para que requiera a quien le corresponde cumplir con dicha carga, y ésta la lleve a cabo dentro del término de treinta (30) días, so pena de declarar terminada la actuación por tal omisión.

Con base en esta regulación procesal, la *iudex A Quo*, en tres oportunidades, esto es, en providencia de 26 de junio de 2021, del 3 de febrero de 2022 y, finalmente el 22 de junio de 2022, requirió a la parte demandante para que realizara la notificación del demandado, habiendo explicado en las dos primeras providencias los motivos por los cuales no podía tenerse a éste notificado por conducta concluyente y por qué la notificación por aviso enviada debía estar precedida de citación para la diligencia de notificación personal, decidiendo finalmente, al vencerse el último término concedido, sin que se lograra la notificación del demandado, terminar el proceso en aplicación de la plurimencionada figura de desistimiento tácito.

El apoderado de la parte demandante recurrente como argumento de la alzada insiste en decir que no estaba obligado a cumplir la carga impuesta, porque el demandado ya estaba notificado, bien por conducta concluyente o mediante el aviso que esa parte le remitió, planteamiento que no comparte este Despacho porque, para que exista notificación por conducta concluyente, cuando la misma es por otorgamiento de poder, debe existir un poder adecuadamente conferido y una providencia que reconozca personería, siendo precisamente la notificación de esa providencia que reconoce personería el acto que da certeza sobre la configuración de esta especial forma de notificación por así establecerlo claramente el artículo 301 del C.G.P. al disponer que: “*Quien constituya apoderado judicial se entenderá notificado por conducta concluyente de todas las providencias que se hayan dictado en el respectivo proceso, inclusive del auto admisorio de la demanda o mandamiento ejecutivo, el día en que se notifique el auto que le reconoce personería, a menos que la notificación se haya surtido con anterioridad...*”. Como en el caso bajo examen se arrimó poder, pero sin los requisitos formales para ser tenido válidamente en cuenta, no había lugar al reconocimiento de personería y, por ende,

tampoco se configuró notificación por conducta concluyente, defectos que el juzgado puso de presente de forma clara, insistiendo en que a falta de dicho poder debía realizarse la notificación del demandado y, a pesar de ello, la misma no se surtió.

Tampoco se comparte el planteamiento del recurrente relativo a que el aviso enviado era suficiente para entender surtida la notificación del demandado, porque, aunque es cierto que el Decreto 806 de 2020 estableció la posibilidad de realizar la notificación personal sin necesidad de previa citación, ello aplica para los casos en que la misma se pudiera efectuar por medios electrónicos, pero, ante la ausencia de datos electrónicos de contacto del demandado, como ocurre en este caso, se debe acudir a la forma de notificación establecida en los artículos 291 y 292 del C.G.P. normas que establecen la posibilidad de notificación por aviso, **previa remisión de citación para la diligencia de notificación personal**, citación que aquí no se remitió porque, de forma obstinada, la parte demandante insistió en no enviarla, a pesar de la reiteración justificada del juzgado de primer grado en la necesidad de realizar citación previa.

La parte demandante recurrente también señala en su recurso que en el auto admisorio de fecha 4 de febrero de 2021 el juzgado determinó: *“NOTIFICAR, EMPLAZAR, RECONOCE PERSONERÍA, Y DICTA OTRAS DISPOSICIONES”*, de lo cual pretende dar a entender el recurrente que con el emplazamiento de todas las personas que tengan algún interés sobre el predio a expropiar se entendería surtida la notificación del demandado, argumento que debe desestimarse por desacertado, en tanto, en el auto admisorio claramente se estableció, incluso en numerales separados, que la notificación del demandado se realizaría *“de conformidad con los artículos 291 a 293 del Código General del proceso en concordancia con lo dispuesto en el artículo 8° del Decreto 806 de 2020”* y que, por otro lado, se realizaría el emplazamiento de las personas que se crean con derecho a intervenir en el proceso, orden separada y diferenciada que además coincide con la lógica del emplazamiento a personas indeterminadas en materia civil, en tanto, una cosa es la notificación del demandado determinado contra quien se dirige la demanda y, otra diferente y

adicional, es el llamamiento, de forma indeterminada, a las demás personas que se crean con derecho a intervenir en un algunos procesos especiales, siendo absolutamente inadecuado confundir la notificación del demandado determinado señor SAMUEL FERNANDO LOPEZ RODAS, con el emplazamiento que se realiza de forma genérica a terceros eventualmente interesados. Es que incluso, aunque eventualmente en un proceso civil un demandado determinado puede ser también notificado mediante curador *ad litem* previo emplazamiento, ese emplazamiento es diferente al de las personas indeterminadas y además, para ello también debe acreditarse que no se conocen datos de notificación del demandado o que conociéndose no fue posible concretar la notificación personal o por aviso (previa citación), circunstancias que no se presentan en este caso donde se conoce una dirección del demandado y la notificación personal no se ha surtido, como tampoco se ha realizado debidamente la citación para la notificación personal que debe preceder el aviso.

Preciso resulta advertir que la notificación personal, como el primer acto de enteramiento de la parte llamada a resistir una pretensión, debe surtir unas formalidades establecidas por el legislador, las cuales no pueden ser pasadas por alto, porque en caso de omitirse se incurre en nulidad del proceso, de modo que el actuar de la juez de primera instancia, encaminado a procurar la adecuada notificación de la parte demandada para evitar nulidades y, a orientar a la parte demandante sobre la forma correcta de cumplir con la carga de notificación, resulta acertado, siendo lo reprochable, en este caso, la insistencia de la parte demandante en no cumplir con las formalidades que exige la normatividad procesal civil de cara a la vinculación del demandado al proceso.

Sobre la suficiencia de las actuaciones para superar la carga impuesta en aplicación del artículo 317 del C.G.P., pertinente resulta traer a colación el pronunciamiento efectuado por la Corte Suprema de Justicia en su Sala Civil, en la Sentencia STC11191 de 9 de diciembre de 2020, proferida dentro del expediente radicado 11001 22 03 000 2020 01444 01, providencia donde unificó

su criterio en cuanto al entendimiento que se le debe dar al artículo 317 del C.G.P., allí explicó la Corte:

4.- Entonces, dado que el *desistimiento tácito*» consagrado en el artículo 317 del Código General del Proceso busca solucionar la parálisis de los procesos para el adecuado funcionamiento de la administración de justicia, la *«actuación»* que conforme al literal c) de dicho precepto *«interrumpe»* los términos para se *«decrete su terminación anticipada»*, es aquella que lo conduzca a *«definir la controversia»* o a poner en marcha los *«procedimientos»* necesarios para la satisfacción de las prerrogativas que a través de ella se pretenden hacer valer.

En suma, la *«actuación»* debe ser apta y apropiada y para *«impulsar el proceso»* hacia su finalidad, por lo que, *«[s]imples solicitudes de copias o sin propósitos serios de solución de la controversia, derechos de petición intrascendentes o inanes frente al petitum o causa petendi»* carecen de esos efectos, ya que, en principio, no lo *«ponen en marcha»* (STC4021-2020, reiterada en STC9945-2020).

Ahora, lo anterior se predica respecto de los dos numerales de la norma comentada, ya que además que allí se afirma que el *«literal c»* aplica para ambos, mediante los dos se efectivizan los principios de eficacia, celeridad, eficiencia, lealtad procesal y seguridad jurídica. No obstante, dado que prevén hipótesis diferentes, es necesario distinguir en cada caso cuál es la *«actuación eficaz para interrumpir los plazos de desistimiento»*.

Como en el numeral 1° lo que evita la *«parálisis del proceso»* es que *«la parte cumpla con la carga»* para la cual fue requerido, solo *«interrumpirá»* el término aquel acto que sea *«idóneo y apropiado»* para satisfacer lo pedido. **De modo que si el juez conmina al demandante para que integre el contradictorio en el término de treinta (30) días, solo la «actuación» que cumpla ese cometido podrá afectar el cómputo del término.**

En el supuesto de que el expediente *«permanezca inactivo en la secretaría del despacho, porque no se solicita o realiza ninguna actuación (...) en primera o única instancia»*, tendrá dicha connotación aquella *«actuación»* que cumpla en el *«proceso la función de impulsarlo»*, teniendo en cuenta la etapa en la que se encuentre y el acto que resulte necesario para proseguirlo.

Así, el impulsor de un declarativo cuyo expediente ha estado en la *«secretaría del juzgado»* por un (1) año sin emplazar a uno de los herederos del extremo demandado, podrá afectar el conteo de la anualidad con el *«emplazamiento»* exigido para integrar el contradictorio.

Si se trata de un coercitivo con *«sentencia o auto que ordena seguir adelante la ejecución»*, la *«actuación»* que valdrá será entonces, la relacionada con las fases siguientes a dicha etapa, como las

«liquidaciones de costas y de crédito», sus actualizaciones y aquellas encaminadas a satisfacer la obligación cobrada.

Lo dicho, claro está, sin perjuicio de lo dispuesto por la Corte Constitucional (sentencia C-1194/2008), en cuanto a que el *«desistimiento tácito»* no se aplicará, cuando las partes *«por razones de fuerza mayor, están imposibilitadas para cumplir sus deberes procesales con la debida diligencia»*. (Resaltado intencional).

En el caso concreto entonces, la actuación idónea y apropiada para el cumplimiento de la carga procesal pendiente, era la de notificar a la parte demandada, pues sólo así podría impulsarse el proceso, pero como está claro que la carga no se cumplió ante la insistencia de la parte demandante en que se tengan como notificación actuaciones carentes de las formalidades necesarias para ello, evidente resulta la configuración de los supuestos de hecho necesarios para dar aplicación a la causal 1ª del artículo 317 del Código General del Proceso, en tanto, el término previsto en dicha norma, venció sin que mediara actuación **efectiva, idónea y apropiada** de la parte interesada para el cumplimiento del requerimiento, a pesar de haber sido claro el mismo y que resultaba necesario para el adelantamiento de la causa, siendo la decisión a adoptar en esta instancia, la de **CONFIRMAR** el auto apelado, sin lugar a condenar en costas al recurrente en esta instancia, en la medida en que no se causaron.

Finalmente, teniendo en cuenta que la orden de terminación del proceso por desistimiento tácito implica el consecuencial levantamiento de las medidas cautelares y, en este caso, la juez de primer grado no dispuso ello, a pesar que incluso realizó entrega anticipada de la franja de terreno objeto de litigio, se adicionará la providencia para disponer el levantamiento de la entrega anticipada de la franja de terreno objeto de litigio, correspondiendo a la juez de primera instancia realizar las diligencias encaminadas a efectivizar dicho levantamiento.

Por lo expuesto, la **suscrita Magistrada Sustanciadora de la Sala Civil del Tribunal Superior de Medellín,**

III. RESUELVE

PRIMERO. ADICIONAR el auto de fecha 29 de agosto de 2022, proferido por el Juzgado Noveno Civil del Circuito de Medellín, para disponer el levantamiento de la entrega anticipada de la franja de terreno objeto de litigio, correspondiendo a la juez de primera instancia realizar las diligencias encaminadas a efectivizar dicho levantamiento.

SEGUNDO. CONFIRMAR en lo demás el auto de fecha 29 de agosto de 2022, proferido por el Juzgado Noveno Civil del Circuito de Medellín.

TERCERO. NO CONDENAR en costas en esta instancia.

CUARTO. En firme este proveído **DEVUÉLVASE** el expediente al juzgado de origen para lo de su competencia.

NOTIFÍQUESE Y DEVUÉLVASE


MARTHA CECILIA OSPINA PATIÑO
Magistrada

(Firma escaneada conforme al artículo 105 del C.G.P. en concordancia con la Ley 2213 de 2022)